

INTRODUCCIÓN

Desde el 27 de diciembre de 1974, México ha hecho patente su compromiso con la igualdad jurídica de mujeres y hombres al reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando lo siguiente, al párrafo segundo del Artículo 4º: *“El varón y la mujer son iguales ante la Ley”*.

Sin embargo, esta disposición no siempre se ha traducido en un derecho efectivo para las mujeres, ya que en la sociedad mexicana se percibe una marcada práctica de exclusión, marginación y violación de los derechos fundamentales del sexo femenino.

La discriminación hacia las mujeres no es exclusiva de nuestro país, muy al contrario, es un fenómeno que se da en todo el mundo, por lo cual se reconoció en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la necesidad de promulgar una Convención específica contra la discriminación hacia el sexo femenino. Esta es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que vio la luz en 1979 y fue ratificada por México en 1981.

El Artículo 2º. de esta Convención establece:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra a mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad y asegurar por ley u otros medios apropiados, la realización práctica de ese principio.*
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.*

Con fundamento en el Artículo 133 constitucional, los convenios y tratados internacionales firmados por el Presidente y aprobados por el Senado, son ley suprema de toda la Unión, por lo cual queda patente la obligación del Estado Mexicano de legislar respecto a la discriminación de las mujeres en el país.

Con la promulgación el 2 de agosto de 2006 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se dio cumplimiento a esta obligación.

Por otra parte, el Artículo 14 de esta Ley establece que *“Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”*.

De esta manera, al promulgar el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Leonel Godoy Rangel, el 1º de enero del 2009 la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo, está dando cumplimiento a una obligación establecida tanto en un tratado internacional como en una ley federal.

Por otra parte, esta ley responde a una necesidad concreta del estado de Michoacán, como se puede ver reflejado en algunas estadísticas: la mujer representa el 52% de la población michoacana, el 24% de éstas son jefas de familia, de las cuales 70% enfrentan algún nivel de pobreza. El 40% de las mujeres que trabajan lo hacen en el área de servicios y con ingresos muy bajos.¹

El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 reconoce que, *“El único modo de modificar a nivel estatal la situación de pobreza es incrementar su desarrollo humano mejorando la situación de las mujeres”*.²

La promulgación de la presente ley es un paso en la dirección correcta y responde a una línea de acción concreta de dicho Plan, que se refiere concretamente a *“Reforzar el papel de la mujer en la sociedad a través del impulso de medidas para lograr la igualdad de género, evitando toda forma de discriminación y garantizando la protección de sus derechos”*.³

La igualdad será un eje rector del Estado de Derecho que permita el ejercicio pleno del desarrollo de los hombres y las mujeres de Michoacán.

¹ Ver Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, *Política social para la equidad de género*, p. 174.

² *Idem*.

³ *Ibidem*, p. 175.

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria para todo el Estado y tiene por objeto establecer los lineamientos generales de las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno para promover, impulsar y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como en el privado.

Comentario

Como es el caso de casi todas las leyes de derecho público, el Artículo 1º de la *Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo* (en adelante la Ley) califica su contenido como de orden público y de interés social. Por otra parte, al establecer que es de observancia general y obligatoria para todo el Estado, podemos decir que refuerza lo establecido en el Artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que ya introduce el tema de la igualdad (o no discriminación) al señalar: “*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, **sexo**,⁴ edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas*”.

Por otra parte, al establecer el objeto de la ley, queda manifiesto que será necesaria una efectiva coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado. Al decir *sustantiva*, el legislador no se limita a lo que tradicionalmente se conocía como la igualdad ante la ley sino que da un paso más, al acercarse a la definición aristotélica de la justicia consistente en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

⁴ Las negritas son de la autora.

En efecto, como lo dice el Dr. Miguel Carbonell en sus comentarios a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación *“Podríamos suponer que los hombres y las mujeres son, en principio, iguales para el efecto de su tratamiento por la ley, pero si acudimos a las estadísticas comprobaremos que esa igualdad jurídica se materializa en severas desigualdades fácticas, lo cual implica, por ejemplo, que las mujeres estén relegadas en mucho ámbitos, no porque la ley les prohíba ingresar en ellos, sino debido a las formas de convivencia social y a que muchos prejuicios se los impiden”*.⁵

Por último, cabe resaltar el acierto del legislador al no limitar el ámbito de aplicación de la Ley al ámbito público, sino también al ámbito privado. Las feministas de los años 70s promulgaban el lema *“lo personal es político”*, buscando evidenciar que las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito privado, son también responsabilidad del Estado quien deberá tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra. En la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Viena en 1993, *“al señalar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, las mujeres están postulando que las violaciones y la discriminación contra ellas, es una realidad devastadora que está exigiendo remedios tan urgentes como otras violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres cometidas en la esfera privada del hogar, por ejemplo, o en el contexto de las relaciones íntimas o familiares, son un fenómeno persistente que hasta muy recientemente no eran considerados como competencia de los gobiernos o como parte de sus obligaciones respecto de los derechos humanos”*.⁶ Con lo postulado en éste artículo, el gobierno michoacano reconoce que lo que ocurre en el ámbito privado, también concierne al estado en cuanto a su obligación de “promover, impulsar y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.

Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción; encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y de oportunidades;
- II. Androcentrismo: La visión basada en la creencia ontológica de que la realidad y la existencia de la vida se inscribe y se sustenta en la supuesta preponderancia del sexo masculino por considerarse a sí

⁵ Ver Carbonell, Miguel, *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Comentada*, Colección Estudios 4, Consejo Nacional para Prevenir la discriminación, México, 2007, p. 9.

⁶ Bunch, Charlotte; Hinojosa, Claudia y Reilly, Niamh, editoras, *Los Derechos Humanos de las Mujeres son Derechos Humanos*, edit. EDAMEX, México, 2000.

mismo más dotado, inteligente, capaz, hábil y superior; respecto del femenino.

- III.** Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
- IV.** Derechos Humanos: Son los derechos universales, indivisibles, inalienables e inherentes a las personas desde su nacimiento, mismas que se consideran libres e iguales en dignidad y en derechos, sin distinción alguna de edad, raza, color, sexo, idioma, religión, discapacidad, preferencias sexuales, opinión política o de cualquier otra índole; ya sea suya o de sus ascendientes o descendientes; origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
- V.** Estado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
- VI.** Igualdad sustantiva: La igualdad entre mujeres y hombres se concreta a través de acciones, medidas y políticas efectivas diseñadas para eliminar las desventajas e injusticias que impiden el ejercicio de los derechos, con la finalidad de proteger el principio de autonomía personal, basada en el análisis de las diferencias entre las mujeres y los hombres, en cuanto a su reconocimiento como pares desde el paradigma de la equivalencia humana.
- VII.** Ley: Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Michoacán de campo.
- VIII.** Perspectiva de género: La visión de enfoque científico, analítico y político sobre las mujeres y los hombres que se encaminan a identificar y erradicar las causas de opresión, jerarquización, discriminación y desigualdad basada en el género, a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; logrando que los géneros tengan el mismo valor y su relación se funde en la igualdad de oportunidades y de tratos, así como en el acceso paritario a los recursos económicos, del desarrollo social, de representación política y en la toma de decisiones.
- IX.** Política Estatal: La Política Estatal en materia de Igualdad.
- X.** Programa Estatal: El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- XI.** Secretaría: La Secretaría de la Mujer del Estado.
- XII.** Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- XIII.** Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objeto de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres, cualquier acción que se programe, tratándose en materia de legislación,

políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales dentro de las instituciones públicas y privadas.

Comentario

En este artículo, además de aclarar las abreviaturas que se usarán para facilitar la lectura de la Ley, se dan definiciones de conceptos importantes que se tomarán como base para la implementación de acciones concretas por parte del gobierno, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el estado. Cada una de las definiciones será el marco de referencia legal de actuación en el Estado.

El concepto de “acciones afirmativas” como se define en la ley, tiene entre sus características, efectivamente ser acciones temporales o transitorias e incluye *“cualquier medida que contribuya a eliminar las desigualdades en la práctica y que ponga en marcha programas concretos para proporcionar a las mujeres ventajas concretas”*.⁷

Para reconocer un fenómeno, hay que empezar por identificarlo y nombrarlo y eso es lo que hace el legislador en este artículo de la ley al dar una definición de androcentrismo. Con esto, se nombra la visión del mundo según la cual el parámetro de lo humano es el varón, como ser superior por naturaleza. De esta manera, se hace posible identificar esta visión y reconocer que no es “natural” sino que simplemente es una visión particular del mundo con la cual se coloca al hombre en términos de superioridad respecto a la mujer.

El término “derechos humanos” que se define en este artículo, tiene su origen en el término “derechos del hombre” que surge durante la Revolución Francesa de 1789, para expresar los derechos del individuo, masculino desde luego, frente al soberano. En 1948, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se proclamó la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* que constituye el referente moderno más importante en el tema de los derechos humanos. El hecho de que se denomine derechos humanos y no “derechos del hombre” no es gratuito ni fortuito. Fue gracias a la ardua labor de cabildeo de la Señora Eleanor Roosevelt, esposa del entonces Presidente de los Estados Unidos de América, quien logró que se acuñara el término Derechos Humanos, por ser más incluyente, específicamente con respecto a las mujeres. Con éste término, se buscaba disociar el término “hombre” de “ser humano” ya que más

⁷ González Marín, Nuria y Chávez Sánchez Odalinda, *Dos temas torales para los Derechos Humanos: Acciones Positivas y Justiciabilidad de los Derechos Sociales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2008, p. 5.

de la mitad de las personas o seres humanos, no son *hombres* sino *mujeres*, igualmente humanas.

Cabe señalar que el término Derechos Humanos en su origen se refería exclusivamente a los derechos que tienen los individuos frente al poder del Estado. Fue en 1994 en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, que se declaró el derecho de las mujeres a no sufrir violencia en el ámbito privado, y que el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a las mujeres de la violencia, en todos los ámbitos de la vida, mediante la prevención, la sanción y finalmente la erradicación de la violencia contra ellas.

Al definir la *igualdad sustantiva*, el legislador deja claro que no nos vamos a limitar a señalar una igualdad jurídica, *de iure* sino que se obliga al Estado a lograr una igualdad *de facto* entre mujeres y hombres, mediante políticas públicas y acciones concretas encaminadas hacia este objetivo.

Para comprender mejor el término de *perspectiva de género* se debe partir de la definición de la palabra “género”. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, es “*la categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad.*” Por su parte, Joan Scott la define como: “*un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de relaciones significantes de poder*”.⁸

Por lo anterior, podemos deducir que el género es la construcción social de la diferencia biológica, que varía según el tiempo y el lugar, y por lo tanto puede cambiar para equilibrar los roles asignados socialmente a mujeres y hombres. La perspectiva de género por lo tanto, es la que permite hacer visible esta asignación de roles y características a mujeres y hombres de manera más igualitaria.

Al definir transversalidad, por último, podemos señalar que este concepto fue definido por primera vez en la III Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi (1985), y adoptada como una estrategia generalizada de acción en la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing en 1995. El sentido principal otorgado a esta noción, ha sido incorporar la perspectiva de igualdad de género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución, y evaluación de las políticas públicas, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del

⁸ *Glosario de Género*, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, pp. 72 y 73.

impacto de la distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de género.⁹

Artículo 3º. La Ley se sustenta en el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales y en la Constitución del Estado.

Comentario

De todos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos destacar algunos que se vinculan de manera más directa a los temas de esta Ley:

- Artículo 1º, párrafo 3: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el **género**,¹⁰ la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
- Artículo 3º, “Todo individuo tiene derecho a recibir educación...., II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, **luchará contra** la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y **los prejuicios**¹¹. ...c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, **evitando los privilegios** de razas, de religión, de grupos, **de sexos**¹² de individuos...”
- Artículo 4º, “El varón y la mujer son iguales ante la ley...”
- Artículo 123, “...A. VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad....B. V. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo.”

Por otra parte, los principales instrumentos internacionales que se deben tomar en cuenta son la Convención para Eliminar Todas las Formas de

⁹ *Idem*, p. 126.

¹⁰ Negritas de la autora

¹¹ *Idem*

¹² *Ibidem*

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), y su Protocolo Facultativo así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, *Belem dó Pará*. De igual manera, aunque no sean vinculatorias, nos servirán de referencia el Programa de Acción de El Cairo que surge de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 1994, así como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995.

La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que como lo comentamos con relación al artículo 1º de la Ley, estipula: “*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, **sexo**,¹³ edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas*”.

Artículo 4º. Los derechos que establece esta Ley, protegen a las mujeres y a los hombres que se encuentren en el territorio del Estado, que por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, discapacidad, entre otros se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o en su caso, por las leyes aplicables en la materia.

Comentario

El primer párrafo de este artículo establece el ámbito territorial de validez de la ley como el territorio del Estado. Por otra parte, se estipula que el bien jurídico tutelado por esta ley es el principio de igualdad, por lo cual se protegerá a las personas que sean discriminadas por cualquiera de las razones que se enumeran y que son las causas más comunes de discriminación. Resulta importante señalar que no es limitativa la enumeración de circunstancias que pueden ocasionar dicha discriminación, por lo cual el legislador señala “entre otros” al finalizar la lista de causales.

En el segundo párrafo, se hace patente la fuerza coercitiva de la Ley, al señalar que la no observancia de la misma conllevará una sanción establecida en la

¹³ Las negritas son de la autora.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Con esta disposición queda claro que quienes son, en primera instancia, responsables de la aplicación de la Ley son los servidores públicos, pero al señalar que también se podrá sancionar a quien transgreda la Ley “por las leyes aplicables en la materia” se deja abierta la posibilidad de sancionar incluso a particulares que incumplan con las disposiciones de la Ley, ya que, de acuerdo al Artículo 1º de la misma, “tiene por objeto establecer los lineamientos generales de las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno para promover, impulsar y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres **tanto en el ámbito público como en el privado**”.¹⁴

Artículo 5º. Los principios rectores de la presente Ley son: La igualdad, la perspectiva de género, la no discriminación, la equidad y todos aquellos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.

Comentario

Al establecer los principios rectores de la Ley, se facilita su posterior interpretación. El término de “igualdad” lo podemos encontrar definido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la siguiente manera: *“igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”*.¹⁵

La perspectiva de género se encuentra definida en la fracción VIII del Artículo 2º de la propia ley.

La no discriminación la podemos definir a *contrario sensu* de acuerdo al concepto de discriminación contra la mujer que encontramos en la CEDAW: *“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer en lo concerniente a los derechos humanos y las libertades fundamentales, particularmente en las esferas política, económica, social, cultural y civil. Así mismo, todo prejuicio y comportamiento que esté basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”*.

¹⁴ Negritas de la autora

¹⁵ Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 6º.

Por equidad, entendemos un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define la “equidad” como “una igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.¹⁶

En cuanto a los principios reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales, ya nos hemos referido a ello anteriormente.

Artículo 6º. El reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, tiene como finalidad eliminar toda forma de desigualdad en cualquiera de los ámbitos de la vida, siendo por cuestión de sexo, la razón de la misma.

Comentario

En este artículo se reafirma nuevamente el objetivo de la Ley, en el sentido de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado. La norma actuará como un elemento esencial en la eliminación de factores que impidan el ejercicio de derechos fundamentales.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio básico para la democracia que demanda el que unos y otras participen activamente y estén representados en los diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos del país. La discriminación hacia la mujer y la violencia que se ejerce en su contra, en cualquier ámbito y bajo todas sus formas, pone de manifiesto una problemática que, sin ninguna duda, debe constituir una preocupación para toda la sociedad y la búsqueda de acciones que nos permitan combatir y erradicar dichos comportamientos.¹⁷

La igualdad jurídica de los hombres y las mujeres representa una nueva forma de cultura legal y educativa en el ámbito público y privado, se presenta como

¹⁶ Ver Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, p. 159.

¹⁷ Ver Informe Anual 2007, Volumen II, Situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2008, p. 20.

marco educativo a la población y las autoridades para un desarrollo armónico de la población en Michoacán.

La igualdad jurídica y la material de los derechos de hombres y mujeres representan un esfuerzo en un cambio de paradigmas culturales de relaciones interpersonales en ámbitos público y privado.

Artículo 7º. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán suplementariamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y las disposiciones de las leyes estatales que contengan preceptos en materia de esta Ley, siempre y cuando no se contravengan con el objeto de la misma.

Comentario

En la aplicación de cualquier ley siempre existen algunas lagunas, las cuales serán subsanadas mediante la aplicación de otra u otras normatividades, así como la interpretación hermenéutica de las mismas o la aplicación de principios generales de derecho.

El objeto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal es el de regular el funcionamiento de la Administración Pública Estatal Artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Este artículo se refiere a la aplicación de la Ley y en particular a las obligaciones de las instancias gubernamentales. Aunque en el desarrollo de esta Ley se explica de manera clara cuáles son las atribuciones y funciones de cada una de las entidades, nos refieren que se podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal en caso de duda, así como el marco jurídico estatal que resulte aplicable pero siempre teniendo en cuenta que no se oponga al objeto mismo de la Ley que es lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado de Michoacán.

TÍTULO II **DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES**

CAPÍTULO PRIMERO **DE LAS COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL**

Artículo 8º. El Estado y los municipios ejercerán las atribuciones dispuestas en esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y con base en otros ordenamientos aplicables.

Comentario

La aplicación armónica de la Ley implica la participación organizada de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, las bases de coordinación entre éstos permitirá la aplicación e instrumentación de la Ley.

El Estado de Michoacán adopta como base de su división territorial, su organización política y administrativa el Municipio Libre. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia del gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado, así lo establecen los Artículos 111 y 112 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

La elección de los integrantes de los ayuntamientos se celebrará el segundo domingo del mes de noviembre del año en que concluya el periodo constitucional, y tomarán posesión de su cargo el día primero de enero del año siguiente al de su elección.

Uno de los principales objetivos de la Ley es coordinar las acciones que llevarán a cabo el Estado y los municipios para lograr de manera conjunta la igualdad entre mujeres y hombres. Para esto, la Ley describe cuáles son las atribuciones de cada una. En cuanto a los ordenamientos aplicables, resultan de particular interés el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a las atribuciones y competencias del Municipio Libre.

Artículo 9º. El Estado y los municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal.

Comentario

El Artículo 25 de la Ley señala que *“El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los municipios; a fin de efectuar acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, respetando los diferentes niveles de competencia.”* En este artículo se establece la necesidad de que se acuerden

las bases para hacer efectiva la coordinación que requiere el Sistema Estatal para llevar a cabo acciones y políticas de manera conjunta y efectiva.

Artículo 10. El titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con instancias de otros niveles de gobierno, a fin de:

- I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad.
- II. Establecer mecanismos para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública estatal.
- III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema Estatal.
- IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia estatal.
- V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria entre mujeres y hombres, en la toma de decisiones a nivel económico, en la vida social, cultural y civil.

Comentario

Este artículo se vincula con el anterior, estableciendo la manera en que se establecerán las bases de coordinación, a través de convenios específicos para lograr los objetivos que se enumeran de manera detallada en este artículo. Nuevamente, se especifica que se deberán desarrollar acciones concretas y políticas públicas encaminadas hacia el objetivo común que es lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado.

Artículo 11. Los convenios o acuerdos de coordinación que se suscriban, deberán contemplar los recursos presupuestarios, materiales y humanos necesarios, previa autorización del proyecto correspondiente para su cumplimiento, tomando en cuenta la normatividad jurídica correspondiente.

Comentario

El vínculo entre las políticas económicas y el género es un hecho que se reconoce a nivel internacional como lo podemos constatar en la resolución 50/104 del 20 de diciembre de 1997 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que urge a los gobiernos a desarrollar y promover metodologías para la

incorporación de la perspectiva de género en las políticas, incluyendo las económicas.¹⁸

Por lo tanto, constituye un acierto del legislador prever en este artículo que se deberán asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones previstas por las políticas que pondrán en marcha de manera conjunta los estados y municipios.

En la instrumentación administrativa de la Ley, la asignación de recursos económicos etiquetados en forma específica, así como la participación de recursos humanos con una visión renovada en la perspectiva de género, permitirá la eficacia de esta normatividad.

Artículo 12. La evaluación de resultados por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, se realizará a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de acuerdo con las atribuciones que su propia Ley le confiere.

Comentario

De acuerdo al Artículo 9º, fracción V de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, son atribuciones de la Comisión:

V. ...proponer políticas estatales en materia de Derechos Humanos a través de pronunciamientos, así como diseñar y establecer los mecanismos de coordinación entre la Comisión, el sector público y la sociedad civil que aseguren su adecuada observancia y ejecución.

De esta manera, vemos que será la Comisión Estatal de Derechos Humanos la encargada de la importante tarea de evaluar los resultados de las acciones que se estén llevando a cabo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado. En efecto, la evaluación de resultados, por medio de indicadores previamente definidos, son indispensables para determinar si una política pública está dando los resultados esperados de acuerdo a los objetivos planteados y los recursos destinados para ello y así decidir si se continúa, se modifica o se suspende determinada acción.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

¹⁸ Ocampo, José Antonio, "Políticas Públicas y Equidad de Género" en Macroeconomía, Género, y Estado, Departamento Nacional de Planeación, con el auspicio de BMZ y la GTZ, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998, pp. 309-319.

Artículo 13. Corresponde al Gobernador del Estado:

- I. Conducir la política estatal en materia de igualdad.
- II. Elaborar la política estatal, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la presente Ley.
- III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la política estatal prevista en esta Ley.
- IV. Coordinar las acciones para fortalecer la transversalidad en los programas de Gobierno, así como crear y aplicar el programa estatal, con los principios que la Ley señala.
- V. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, mediante la adopción de políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.
- VI. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género.
- VII. Incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de la Política Estatal en materia de Igualdad.
- VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Comentario

Con relación a las atribuciones del Ejecutivo Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo establece en el Artículo 4º. “El gobernador del estado, a través de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, promoverá y cuidará que se cumplan los principios de equidad social mediante la promoción de igualdad de oportunidades, equidad de género, respeto a la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas del estado...”

Disposición que justifica la resolución de la Ley en este artículo, por cuanto los deberes del Ejecutivo Estatal para promover, conducir y elaborar, la política en materia de igualdad. Mediante la coordinación de acciones, el diseño y adopción de políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades

para hombres y mujeres. Para ello, se celebrarán acuerdos de coordinación, cooperación y concertación.

Dispone además, la obligación del Gobernador para incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado, una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previsto en la misma; en virtud de que el éxito o fracaso se condiciona por los recursos, la visibilidad y la fuerza de los distintos participantes involucrados en las políticas públicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en el párrafo primero del Artículo 4º la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley, esto es, equipara jurídicamente el género femenino con el género masculino. Igual derecho tienen hombres y mujeres para acceder a la educación tal como se desprende del contenido del Artículo 3º. En el Artículo 5º del mismo ordenamiento jurídico se contempla la garantía de la libertad del trabajo.

Del Artículo 34 constitucional se desprende que los mexicanos mayores de 18 años, trate de hombre o mujer adquieren la capacidad de ejercicio y la categoría jurídica de ciudadano, que como integrante de la unidad política llamada “Estado” puede y debe participar directa o indirectamente en la estructura del poder estatal y en la realización del orden jurídico de México.

Semejantes disposiciones contienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948, que en su Artículo 1º consagra: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En el Artículo 2.1 expresa que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, posición política o de cualquier otra índole, origen nacional o social posición económica o cualquiera otra condición”. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966, al establecer en el Artículo 3º: “Todos los Estados partes en el pacto se obligan a: asegurar a los hombres y a las mujeres igual título y goce de todos los derechos enunciados”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, tiene redacción semejante en el Artículo 3º.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, en el Artículo 1º establece: “los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la mujer de 1948, señala en su Artículo 1º que las partes contratantes: “convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no debe negarse o restringirse por razones de sexos”. Disposición semejante contempla la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 en su Artículo 1º: “las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condición que los hombres, sin distinción alguna”.

Al señalar el contenido de los instrumentos jurídicos anteriores se justifica el actual del Ejecutivo Estatal para promover y garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, mediante la adopción de políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.

Artículo 14. A la Secretaría le corresponde:

I. Proponer los lineamientos para la formulación de la política estatal en términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal, promueva la igualdad entre la mujer y el hombre.

II. Coordinar el programa estatal que sobre igualdad entre mujeres y hombres promuevan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los grupos sociales que realizan funciones y programas afines y que, en su caso, formen parte de las acciones del Sistema Estatal.

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad, sin menoscabo de la evaluación y seguimiento que haga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con sujeción a las disposiciones generales aplicables.

V. Asesorar a las dependencias sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres.

VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Estatal para fortalecer la formación y capacitación de su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres dentro del área de su competencia.

VII. Fomentar la participación de la sociedad civil en la igualdad entre mujeres y hombres.

VIII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, del Sistema Estatal y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Comentario

Tal como se desprende del Artículo 36 de la Ley Orgánica fracción segunda corresponde a la Secretaría de la Mujer del Estado “formular, promover, concertar y gestionar ante las instituciones competentes; programas, proyectos y acciones con perspectiva de género, así como su instrumentación, ejecución, seguimiento y evaluación, evitando toda forma de discriminación; a fin de favorecer el desarrollo integral de las mujeres. Fracción tercera: “Promover, instrumentar y evaluar de forma transversal los programas, proyectos y acciones que le faciliten a las mujeres el pleno desarrollo de sus potencialidades”.

Por ello, este precepto debe ser una guía para las actividades que ejecuta la Secretaría, es decir, esta institución ha de establecer los lineamientos que regirán la política estatal de acuerdo al contenido del marco jurídico aplicable y en apego a las disposiciones del Ejecutivo Estatal; coordinará, revisará y evaluará el programa estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres; propuesto por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los grupos sociales que promuevan programas afines o formen parte de las acciones del Sistema Estatal.

Artículo 15. Corresponde a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de la Ley, lo siguiente:

I. Conducir, garantizar y fomentar, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, la política pública a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

II. Revisar para su posible reforma o derogación, los reglamentos, normas, acuerdos y cualquier ordenamiento oficial que contenga preceptos que contravengan al objeto de la Ley.

III. Determinar, en el ámbito de sus competencias y en función de lo que establecen los ordenamientos que los rigen, los apoyos y reasignaciones que permitan el cumplimiento del objeto de la Ley.

IV. Elaborar y presentar al Gobernador del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Administración, los requerimientos presupuestales para las políticas públicas, acciones, programas y objetivos del programa estatal, en el marco del Presupuesto de Egresos del Estado.

V. Coadyuvar entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para la elaboración del programa estatal.

VI. Garantizar la difusión de la Ley en la lengua (sic) de las etnias del Estado y promover la igualdad sustantiva entre sus habitantes.

VII. Las demás que estén contenidas en función de sus atribuciones, en cada dependencia y entidad para el cumplimiento del objeto de la Ley.

Comentario

Este artículo exhorta a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal en la búsqueda de estrategias para garantizar y fomentar la implementación de acciones que permitan, tanto a las mujeres como a los hombres, el ejercicio pleno de sus derechos. Sin embargo, han de reflexionar sobre la diversidad de los seres humanos, en virtud de que cada uno es distinto de los demás, no sólo por las características externas, sino por las características propias, como la edad y el sexo, por lo que para la implementación de políticas públicas, en materia de igualdad entre hombres y mujeres se ha de valorar esa diversidad humana.

El artículo *en comento*, alude al mandato del Artículo 4º constitucional respecto de la invalidez de toda norma que dispense un trato heterogéneo y perjudicial en razón de pertenecía a uno u otro sexo, cuando sugiere la revisión de reglamentos, normas y acuerdos, que contengan cánones que contravengan al objeto de la ley, que en el caso, serán derogados o reformados.

Con relación a la difusión, y en virtud de la diversidad cultural se insta a las dependencias para que la difusión de la Ley y la promoción de los programas

de igualdad entre hombres y mujeres, se realice en las lenguas de las etnias del Estado. Así también, las dependencias que formen parte del Sistema Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres; trabajarán de manera coordinada para la elaboración del programa estatal.

Al identificar acciones que implican asignación de recursos, se realizará un cálculo estimado, mismo que se presentará al Gobernador del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Lo anterior, en apego a lo establecido en los Artículos 8, 11, 12 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 16. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes en la materia, corresponde a los municipios:

I. Desarrollar la política pública municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con las políticas nacionales y estatales.

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, la consolidación de los programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

III. Proponer convenios de colaboración al Poder Ejecutivo del Estado, para atender sus necesidades presupuestarias en la ejecución de los programas de igualdad.

IV. Diseñar, formular y promover campañas de concientización, así como programas de desarrollo, de acuerdo a las regiones del Estado.

V. Fomentar e impulsar la participación social y política dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

Comentario

La Ley establece que los municipios deben incluir en sus políticas públicas acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y en aquellas que tienen un carácter nacional y regional se coordinarán con instituciones, o instancias de los Gobiernos Federal y Estatal en la implementación, consolidación y seguimiento de los programas que promuevan la igualdad entre

mujeres y hombres. Las actividades de concientización y programas de desarrollo, se realizarán en consideración a las características de la región, promoviendo la participación de la sociedad.

Al identificar acciones que implican asignación de recursos, se realizarán propuestas de convenios de colaboración con la finalidad de implementar y ejecutar los programas de igualdad entre hombres y mujeres.

En apego a lo dispuesto por los Artículos 12 y 34 fracciones III y XI, y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

TÍTULO III

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD

Artículo 17. La política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad de oportunidades en los ámbitos económico, político, social y cultural.

La política estatal que desarrolló el Ejecutivo del Estado deberá considerar los siguientes lineamientos:

- I. Fomenta y establece la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.
- II. Garantiza la planeación presupuestal del gasto público. Incorpora la perspectiva de género, apoya la transversalidad y prevé el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones orientadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.
- III. Fomenta la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
- IV. Promueve las condiciones para la igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.
- V. Erradica los estereotipos en función del sexo.

Comentario

La Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer estipula en su Artículo 3º:

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas,

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

En este artículo, la Ley cumple con lo dispuesto por la CEDAW, al tomar una medida legislativa para lograr la igualdad de oportunidades en los cuatro ámbitos señalados.

En primera instancia, la igualdad de oportunidades en el ámbito económico podría abordarse desde la garantía legal de igualdad en la remuneración por igual tarea. Esta garantía que se encuentra en diversas convenciones de derechos humanos, está regulada de manera particular en los Convenios No. 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A pesar de lo anterior, persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres por cuatro razones fundamentales: 1) la segregación en el empleo que mantiene a las mujeres en los trabajos considerados “femeninos” con menor sueldo o en niveles más bajos de jerarquía, 2) Por motivos de maternidad, las mujeres suelen interrumpir sus ocupaciones laborales por lapsos de tiempo y posteriormente prefieren empleos de tiempo parcial, 3) Por lo general, las mujeres no se afilian a los sindicatos, 4) Las mujeres cuentan con menores oportunidades de educación y capacitación.¹⁹

El Artículo 7º de la CEDAW señala lo siguiente respecto de la igualdad en el ámbito político:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos; y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

¹⁹ Motta Cristina y Macarena Sáez, editoras académicas, La mirada de los jueces, Género en la jurisprudencia latinoamericana, Tomo I, Red Alas, Bogotá, 2008.

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

De esta manera, nos indica cuáles son las medidas específicas que se deberán tomar para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político.

Los ámbitos económico y político son eminentemente públicos, por lo cuál se pueden traducir fácilmente en políticas públicas. Cuando hablamos de los ámbitos social y cultural, requerimos de una transformación más profunda de las prácticas y costumbres discriminatorias que se deberán cambiar a través de la educación tanto formal como no formal.

De esta manera, el Artículo 10 de la CEDAW establece:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional.

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad.

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza.

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios.

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos,

con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres.

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física.

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

En este artículo se establecen los lineamientos principales que deberán regir la política estatal en materia de igualdad de género. Resulta de vital importancia el reconocimiento de la necesidad de garantizar la planeación presupuestal para llevar a cabo las políticas públicas para la igualdad, así como su transversalización. De esta manera, se asegura que siempre habrá recursos económicos para instrumentar las políticas públicas, por una parte, y por la otra, que no se quedarán como políticas aisladas sino que se incluirán de manera transversal en toda la política pública del país con el fin de erradicar la discriminación por motivos de género.

Artículo 18. La política estatal que mandata la presente Ley, definida en el programa estatal y encausada a través del Sistema Estatal; deberá impulsar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que consoliden la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los propósitos y acciones específicas a que se refiere este título.

De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el objetivo de la transversalidad es transformar la forma en que operan las dependencias públicas y sobre todo los procesos técnicos de formulación y ejecución de las políticas públicas.

El INMUJERES ha definido un conjunto de acciones prioritarias como elementos básicos e indispensables de cualquier estrategia de transversalidad. Estas son:

- a) Los diagnósticos con perspectiva de género
- b) La desagregación de estadísticas por sexo
- c) La construcción de indicadores de equidad de género

- d) La planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género
- e) Los presupuestos sensibles al género
- f) La transparencia y rendición de cuentas de las políticas de equidad
- g) Las acciones afirmativas
- h) La armonización legislativa
- i) La capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos
- j) La inclusión de acciones afirmativas en la cultura organizacional
- k) El monitoreo y la evaluación con perspectiva de género²⁰

Artículo 19. El Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales, Constitución del Estado y esta Ley; expedirá las disposiciones legales necesarias para generar los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén.

Comentario

Las facultades del Congreso del Estado de Michoacán se encuentran contenidas en el Artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con este artículo, el legislador da cumplimiento a la obligación del Estado de llevar a cabo el proceso de armonización legislativa que posibilitará la aplicación de esta Ley sin caer en contradicción con otros instrumentos jurídicos, ya que toda la legislación del Estado deberá estar en armonía con el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La instrumentación de la Ley requiere no sólo una articulación jurídica, es indispensable incidir en la base cultural del Estado, el sistema educativo debe considerar incluir como parte de los contenidos la enseñanza de la Ley de Igualdad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 20. Son instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes:

²⁰ Ver Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, p. 127.

- I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Comentario

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición), *Sistema* significa “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”. La definición jurídica de “Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, se encuentra más adelante en el Artículo 25 de la Ley. En este momento, basta señalar que se refiere al conjunto de acciones que llevarán a cabo las distintas dependencias del Estado para lograr de manera coordinada un mismo objetivo, cada quien desde su ámbito de competencia.

En cuanto a la palabra *Programa* de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición), se refiere a “Edicto, bando o aviso público. Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión”. En el Artículo 30 de la Ley de igual manera se especifica cómo se integrará este Programa que deberá ser parte del Plan estatal de Desarrollo. El Programa contendrá las políticas públicas y líneas de acción que deberán desarrollarse para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.

La política estatal en materia de igualdad involucra a todas las instituciones del Estado para la instrumentación de la Ley en cada una de ellas, con base en las facultades y atribuciones que la Ley de Igualdad y la normatividad aplicable a cada una de ésta confiere.

Artículo 21. En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de la política estatal, se deberán observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.

Comentario

En este artículo se enumeran todos los pasos a seguir desde el diseño de las políticas públicas, hasta su evaluación donde se determinará si el impacto obtenido es el esperado, o no. Queda claro que todos y cada uno de los pasos deberán basarse en el objeto de la Ley que se encuentra en su Artículo 1º: *“tiene por objeto establecer los lineamientos generales de las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno para promover, impulsar y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como en el privado,”* así como en sus principios que se encuentran en el Artículo 5º: *“La igualdad, a perspectiva de género, la no discriminación, la*

equidad y todos aquellos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.”

Artículo 22. El Ejecutivo del Estado es el encargado de la aplicación del Sistema Estatal y el programa estatal, a través de los órganos correspondientes.

Comentario

Para que el Sistema funcione adecuadamente, resulta indispensable que estén bien determinadas las competencias y funciones de las partes involucradas. En este artículo se establece que será el poder ejecutivo del Estado, quien deberá aplicar tanto el Sistema como el Programa.

Artículo 23. La Secretaría, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema Estatal, así como la formulación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley.

Comentario

La Secretaría de la Mujer del Estado es la instancia especializada en los temas de los derechos de las mujeres por lo cual resulta acertado que sea ella quien coordine los trabajos del Sistema, así como la elaboración de las políticas públicas en la materia.

Artículo 24. De acuerdo con la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ese órgano constitucional es el encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal.

Comentario

El Artículo 9º fracción V de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, establece que entre las atribuciones de la Comisión se encuentran: *“Proponer políticas estatales en materia de Derechos Humanos a través de pronunciamientos, así como diseñar y establecer los mecanismos de coordinación entre la Comisión, el sector público y la sociedad civil que aseguren su adecuada observancia y ejecución.”* Este es el fundamento jurídico para el presente artículo que le confiere a la Comisión la evaluación de las políticas públicas que se aplicarán para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.

CAPÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 25. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los municipios; a fin de efectuar acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, respetando los diferentes niveles de competencia.

Comentario

La función del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es organizar y articular los programas propuestos por las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, las organizaciones de los diversos grupos sociales y las autoridades de los municipios, para su implementación y seguimiento, en los diferentes ámbitos de competencia, a fin de lograr el objetivo de la Ley.

La armonización y el funcionamiento eficaz del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, requiere de una participación con equidad y perspectiva de género para su funcionamiento, el compartir principios, valores y una cultura incluyente.

Artículo 26. La Secretaría coordinará las acciones que el Sistema Estatal generará y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con programas de carácter nacional o de otras entidades federativas.

Comentario

La Ley establece el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres e insta a la Secretaría para que coordine a las entidades de la Administración Pública Estatal, las organizaciones de los diversos grupos sociales y las autoridades de los municipios, reconoce así, que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene diferentes matices que deben ser abordados desde diversos enfoques; a fin de que cumpla con sus objetivos. La Secretaría instrumentará medidas para vincular el programa estatal con los programas nacionales o de otras entidades federativas.

Según lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán de Ocampo.

Artículo 27. El Sistema Estatal tiene los siguientes objetivos:

I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres como estrategia para la erradicación de todo tipo de trato desigual.

II. Fomentar acciones de educación para la erradicación de estereotipos que fomenten la desigualdad de género.

III. Promover el desarrollo de programas y servicios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

Comentario

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 1º contiene el principio de igualdad -considerado fundamento de los derechos humanos de todos los individuos-, concebido actualmente como principio de no discriminación, esto es, la igualdad consiste en que las distinciones o diferencias de trato no pueden tener como base la raza, la religión, el sexo o el origen social, por ejemplo. En el Artículo 4º de dicho ordenamiento, se establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, tal como se desprende de la Tesis:

IGUALDAD JURÍDICA DE LA MUJER Y DEL VARÓN. EL ARTÍCULO 299, REGLA PRIMERA, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, NO ES VIOLATORIO DE ESE PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

El mencionado precepto local, al expresar en su primera regla que los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable, no hace distinción alguna entre el hombre y la mujer, lo que se aprecia con mayor claridad si se tiene en cuenta que en el sentido gramatical usual, la voz cónyuge, se usa indistintamente para el marido y para la mujer. No existe pues discriminación alguna tocante a la mujer por razón de su sexo, es decir, que se le condenara a la pérdida de la patria potestad por la sola razón de ser mujer, impidiéndole así su participación activa en la vida social, educativa, económica, política o familiar. Por lo contrario, el Artículo 299, regla primera del Código Civil del Estado de Campeche respeta el principio de igualdad jurídica de la mujer y del varón, cuenta habida que al prevenir que será el cónyuge culpable a quien se le

privará de la patria potestad, evidencia que tal condición puede actualizarse indistintamente, esto es, ya sea por el hombre o por la mujer, de lo cual resulta que el numeral en cuestión no es discriminatorio, en virtud de que respecto a las mismas causales contenidas en la regla primera trata por igual al varón como a la mujer. Luego, sea una u otro quien cometa los actos que precisa la regla primera del Artículo 299 del Código Civil del Estado de Campeche, será considerado cónyuge culpable y, en consecuencia, será privado o privada de la patria potestad en la sentencia de divorcio respectiva.

Clave: 2a., Núm.: LXXIV/2000

Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Por otro lado, el Sistema Estatal para el logro de sus objetivos debe: promover y elaborar estrategias que disminuyan hasta su erradicación cualquier trato desigual; realizar acciones educativas que permitan a la población entender que el término género es el resultado de luchas feministas y de su articulación con el trabajo académico, vinculado con las relaciones sociales y culturales entre hombres y mujeres, con las diferencias entre los roles de unas y de otros. Hacer ver a la sociedad que estas diferencias son producto de cada cultura que concibe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer de una manera diferente. Con apego a lo dispuesto en el Artículo 36 fracciones XIV y XV de la Ley Orgánica.

La implementación del programa estatal se llevará a cabo en distintos espacios de manera simultánea: la cultura, la política y las organizaciones sociales. Esto con la finalidad de contrarrestar los elementos que generan desigualdad en sus distintos ámbitos de intervención y la implementación de políticas de manera integral que atiendan las diversas causas que dan origen a la desigualdad de género y, sobre todo, para favorecer y reconocer la intervención de las mujeres como participantes en distintos espacios públicos e institucionales.

Artículo 28. Los gobiernos tanto estatales como municipales coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren para la consolidación y funcionamiento del Sistema Estatal.

Comentario

Los distintos componentes de “El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” actuarán en forma coordinada bajo el liderazgo de la Secretaría de la Mujer del Estado. En relación con los Artículos 12, 15 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán de Ocampo.

Artículo 29. La concertación de acciones entre el Estado y el sector privado, se realizará mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:

I. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores social y privado.

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.

Comentario

Mediante la concertación se busca impulsar, estimular y hacer visibles los procesos y actividades del programa estatal, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural del estado, para que contribuyan a lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es articular diferentes sectores, generar capacidades para fortalecer el Sistema Estatal y aportar a la convivencia entre hombres y mujeres, un crecimiento con equilibrio y equidad.

Para ello es necesaria la celebración de contratos y convenios, en los que se identifique plenamente a los integrantes tanto del sector social como privado; así también, las responsabilidades y acciones en apego a lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal. Precisar las acciones de orientación, estímulo y apoyo.

CAPÍTULO CUARTO

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 30. El programa estatal se integrará con las acciones afirmativas indispensables para la promoción, prevención, aseguramiento y permanencia de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tomando en consideración en su programación y ejecución, los objetivos, tiempos a corto, mediano y largo

plazo, indispensables para la implementación y cumplimiento de los preceptos inscritos en los objetivos específicos y generales de la Ley.

Será propuesto por la Secretaría y tomará en cuenta las necesidades del Estado y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este programa estatal deberá integrarse al Plan Estatal de Desarrollo.

Comentario

Los integrantes del Sistema Estatal presentarán su proyecto a la Secretaría, quien una vez revisados determinará los lineamientos para la formulación del programa, considerando: a) el tiempo y recursos para su implementación a corto, mediano y largo plazo; b) la selección precisa de los procedimientos a seguir; c) el seguimiento al uso de los recursos financieros y, d) el nivel de desarrollo de la población, cobertura y ubicación geográfica.

Artículo 31. Los informes anuales del Ejecutivo del Estado deberán contener explícitamente, el estado que guarda la ejecución del programa estatal, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Comentario

La Secretaría determinará los periodos y características del informe que deben presentar las dependencias y Entidades de la Administración Pública, para elaborar el informe anual que será entregado al Ejecutivo Estatal, mismo que se integrará al Plan de Desarrollo Integral del Estado.

Artículo 32. La Secretaría deberá revisar el programa estatal cada tres años y tratándose de asuntos urgentes, cuando sea necesario, a propuesta del Congreso del Estado.

Comentario

La ley instruye a la Secretaria para que coordine las acciones del programa estatal con diversas instituciones, establece su atribución para revisar y supervisar la implementación y avance del programa.

En atención a que las acciones que se llevarán a cabo son de diversa índole, algunas requieren atención inmediata, con el fin de atender las necesidades de las mujeres michoacanas. Así por ejemplo, se coordinará con la Secretaría de

Educación del Estado mediante; 1. La incorporación de conocimientos de divulgación e información tendientes a la generación de igualdad para las mujeres y hombres; 2. La formación y capacitación de las y los servidores públicos con perspectiva de género; 3. La promoción y creación de centros municipales de atención a las mujeres, en coordinación con los ayuntamientos. Lo que permitirá conocer ampliamente el avance del programa estatal y los asuntos urgentes que requieren atención inmediata.

Acorde a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán.

TÍTULO IV

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 33. La política estatal definida en sus instrumentos deberá buscar las acciones intergubernamentales para lograr los objetivos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los propósitos específicos a que se refiere este título.

Comentario

El propósito de este artículo es dar el marco de acción para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, enfatizando que todas las acciones que se emprenderán serán de manera coordinada entre las distintas entidades del gobierno estatal así como con los gobiernos municipales.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA ESTATAL

Artículo 34. Será objeto de la política estatal el fortalecimiento de la igualdad en materia económica:

- I. Promoción de fondos para la igualdad en el trabajo y los procesos productivos.
- II. Fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género.
- III. Fortalecer los liderazgos sobre la base de la igualdad de género.

Comentario

En este artículo se define el objetivo específico a lograr en el Estado en materia de igualdad económica. Para que las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades de empleo que los hombres, será necesario que el gobierno invierta en acciones afirmativas para tal fin, previendo un fondo con recursos específicos no sólo para el acceso de las mujeres a empleos sino también a los recursos necesarios para que sean empresarias que participen de manera activa en los procesos productivos.

Para llevar a cabo acciones afirmativas para la igualdad, es necesario tener un programa previo para planear dichas actividades. A esto se refiere el inciso segundo de este artículo al mencionar la necesidad de contar con políticas públicas que tengan perspectiva de género.

Por último, se reconoce la importancia de apoyar a las mujeres líderes, fortaleciendo de esta manera el acceso de las mujeres a los empleos y medios de producción.

Artículo 35. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

- I. Revisar los sistemas fiscales para superar los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo.
- II. Incorporar a la educación, formación técnica y profesional a mujeres y hombres sin distinción.
- III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que, en razón de su sexo, estén relegadas de puestos directivos.
- IV. Establecer la coordinación de los sistemas estadísticos, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral.
- V. Fortalecer la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo.
- VI. Promover programas para la difusión de información y concientización sobre las acciones destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
- VII. Vincular los proyectos y programas para el adelanto de las mujeres.
- VIII. Elaborar y dar seguimiento a los lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la Administración Pública.

- IX. Diseñar programas y proyectos de desarrollo en la búsqueda de reducción de la pobreza con perspectiva de género.

Comentario

En este artículo se enumeran las acciones concretas que se deberán tomar para lograr la igualdad de mujeres y hombres en la vida económica. Cuando analizamos las políticas públicas desde la perspectiva de género, es con el fin de conocer si el gobierno está considerando las diferencias en las necesidades de hombres y mujeres, tomando en cuenta las construcciones culturales a que están sometidos cada uno de los sexos. Es decir, partimos del supuesto de que a parte de las diferencias biológicas que existen entre mujeres y hombres, existen desigualdades que son producto de prejuicios y estereotipos culturales que colocan a las mujeres en situación de desventaja frente a los hombres.

La discriminación hacia la mujer en todos los ámbitos de la vida, es un hecho reconocido ya a nivel internacional y existen consensos en la Organización de Naciones Unidas, entre otras, para reducir la brecha de desigualdad que existe entre los géneros. Una de las formas más importantes de combatir este fenómeno es a través de las políticas públicas donde se refleja el compromiso gubernamental para luchar contra la discriminación hacia las mujeres. Como ejemplo, tenemos la “Convención Para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Hacia la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada en la ONU a principios de los años ochenta y actualmente ratificada por la mayoría de sus miembros.

Los países firmantes de esta Convención se obligan a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación por género y esto incluye desde luego medidas de política fiscal, aunque no lo diga explícitamente la Convención. Podemos afirmar que se deben incluir políticas fiscales en la lucha contra la discriminación hacia la mujer porque si no se destina gasto público para este fin, no se lograrán los objetivos planteados.

En México, el análisis de presupuestos públicos con enfoque de género inició en el año 2000 cuando las feministas quisieron evaluar si en nuestro país el gobierno estaba cumpliendo con un compromiso adquirido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que tuvo lugar en el Cairo en 1994. El compromiso fue el de destinar una cierta cantidad de recursos públicos para la salud sexual y reproductiva de manera progresiva hasta alcanzar cierto porcentaje del presupuesto de salud para 1999, cinco años después de la conferencia. Al analizar el presupuesto, las feministas integrantes del Foro de Mujeres y Políticas de Población pudieron constatar que no sólo no se había

cumplido, sino que cada año se destinaban menos recursos a la salud sexual y reproductiva. De esta manera, se pudo ver que efectivamente el análisis de los presupuestos públicos con enfoque de género, podía convertirse en una herramienta para medir las políticas públicas en cuanto a su eficacia para lograr una mayor equidad de género.

En este artículo entramos al tema de las políticas públicas con enfoque de género. Es importante señalar que no se trata de algunas políticas aisladas destinadas a mejorar la situación de inequidad existente entre los géneros sino de que todas las políticas públicas estén pensadas tomando en cuenta las diferencias de género. Pero antes de adentrarnos al tema, debemos definir en un primer momento, aunque sea brevemente, qué entendemos por políticas públicas y qué entendemos por género. En una segunda parte, veremos los puntos de vista de algunos autores sobre la incorporación del género en la economía y su efecto en las políticas fiscales para terminar exponiendo algunos ejemplos concretos de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de México.

Para hablar de políticas públicas, es necesario mencionar cuál es el papel del Estado en la convivencia social. Sin pretender dar un concepto acabado de lo que es el Estado, podemos mencionar que tiene una función reguladora en la sociedad y se ocupa, entre otras cosas, de la distribución del ingreso y de la equidad (incluyendo la equidad de género). La manera en que actúa el Estado es por medio de *políticas públicas* que se pueden entender como programas de acción del gobierno en un determinado sector. (Lerda et al. 1994: 50)

Los problemas que abordan las políticas públicas no surgen en el momento en que se diseña la política pública pero sí es importante reconocer que se sigue un proceso en el que se selecciona un problema, se formula y se introduce en la agenda gubernamental. Es decir, el problema pudo haber existido desde hace mucho tiempo pero es hasta que cobra relevancia política (muchas veces gracias al cabildeo de los grupos de la sociedad civil) que se implementan políticas públicas específicas con objetivos, medios, tiempos y pasos a seguir. Un ejemplo podría ser el de la violencia intrafamiliar que sabemos que ha existido en toda la historia de la humanidad pero que se reconoció hasta muy recientemente como un problema social grave que el Estado tenía obligación de atender.

Aunque ya hemos venido hablando del concepto de *género*, consideramos importante en este momento, dar una definición de lo que entendemos por *género* y *perspectiva de género*. La doctora Marcela Lagarde (1994: 7) afirma que “la ideología dominante considera que ser mujer u hombre es un hecho

natural y, por lo tanto, los análisis sociológicos, politológicos, de ciencia jurídica e incluso de psicología o de antropología, pocas veces toman en cuenta esta dimensión específica de la sociedad y de la cultura, dada por el género y que compete tanto a las mujeres como a los hombres.”

Con esto entendemos que género se refiere a las construcciones sociales que atribuyen ciertas características a las mujeres y a los hombres y que se dan por hecho, es decir, son prejuicios. Al hablar de perspectiva de género, lo que hacemos es identificar los estereotipos que existen en determinada sociedad y reconocer las inequidades que se dan basadas en estos prejuicios. Una vez reconocidas las inequidades, se trata de buscar las maneras de corregirlas y allí es donde entran en juego las políticas públicas con enfoque de género. Su misión es, por lo tanto, proponer acciones concretas encaminadas a atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, reconociendo las inequidades que existen basadas en el género.

Para hablar de manera más específica de las políticas públicas, y en especial de las políticas económicas con enfoque de género, a continuación veremos cómo han abordado el tema diversos autores.

Cuando se introdujo el concepto de género en los años 60's, se aplicaba principalmente a la sociología, la psicología o la antropología. Sin embargo, algunas feministas economistas reconocieron que también en los modelos económicos existían efectos diferenciados para hombres y mujeres y que éstos debían ponerse en evidencia.

La economía clásica que se apoya en el concepto tradicional de la familia en que los ámbitos de producción y reproducción están claramente definidos y separados, difícilmente puede incorporar la perspectiva de género en sus modelos. Sin embargo, en las escuelas de pensamiento más recientes, se tiene que reconocer forzosamente que las mujeres han entrado masivamente al mercado laboral, es decir a la esfera de la producción, sin dejar su papel fundamental en la reproducción.

La forma y las modalidades con que ingresan las mujeres al mercado laboral desde un principio difieren a las de los hombres ya que muchas veces se deben combinar con el trabajo reproductivo. Esto hace que frecuentemente busquen trabajo estacional o de medio tiempo aunque también puede ser que respondan a las exigencias de las empresas que logran, de esta manera, contratar mano de obra más barata y no tienen que gastar en prestaciones de seguridad social. Generalmente, las condiciones de trabajo de las mujeres se determinan tanto del lado de la oferta como de la demanda y dependen en gran

parte del desarrollo sociocultural y de las relaciones de género que se dan en un lugar y momento determinados. (Guzmán et al, 2001: 21)

Para atender las necesidades específicas de las mujeres en el ámbito laboral, se pueden implementar políticas públicas con enfoque de género como podrían ser por ejemplo las que dan permisos de maternidad a las madres trabajadoras o proveen servicios de guardería por parte del gobierno. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral es sólo un aspecto en el que se puede hacer visible la influencia de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Aunque los modelos macroeconómicos son complejos y cada país tiene su propia política económica, existen algunos consensos en América Latina que citaremos a continuación.

El primer consenso se refiere a que el objetivo principal de la agenda política debe ser la equidad para que el crecimiento económico venga aparejado de una mejoría en la calidad de vida de la población. También se debe partir de la premisa de que el crecimiento no produce automáticamente la equidad y de que el Estado tiene un papel primordial en la distribución de la riqueza. De igual manera, existe el acuerdo de que la falta de equidad afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, precisamente por las diferencias de género y finalmente, existe el consenso en torno a que es indispensable vincular las políticas económicas y sociales para lograr la equidad. (Ocampo, 1998: 310)

Estos consensos a su vez se encuentran plasmados en diferentes instrumentos internacionales entre los cuáles podemos destacar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que obliga a los países signatarios, que incluyen a todos los países de América Latina y el Caribe, a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo las medidas de política económica para asegurar la participación de las mujeres en igualdad de circunstancias con los hombres a todos los espacios de participación ciudadana.

Para que las políticas públicas y en particular las políticas macroeconómicas sean realmente eficaces, es necesario analizar los impactos diferenciados que tienen sobre mujeres y hombres, teniendo en cuenta por ejemplo, su influencia en el trabajo doméstico, sobre el sector informal, el sector rural y en las actividades de servicios, donde las mujeres tienen una participación cada vez mayor.

El vínculo entre las políticas económicas y el género es un hecho que se reconoce a nivel internacional como lo podemos constatar en la resolución 50/104 del 20 de diciembre de 1997 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que urge a los gobiernos a desarrollar y promover metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, incluyendo las económicas. (Ocampo, 1998: 317-318)

Un ejemplo del efecto diferenciado de las políticas económicas en mujeres y hombres se hizo evidente en América Latina cuando en los años 80's, a raíz de la crisis de la deuda, los gobiernos optaron por un ajuste estructural que implicaba la contracción del gasto público en general, y del gasto social en particular. (Grynspan, 1998: 84)

Como resultado de la disminución del gasto social, las mujeres tuvieron que invertir más tiempo en el cuidado de los niños y los enfermos, ya que los servicios de guarderías y de salud se redujeron. De esta manera, el gasto del gobierno en gasto social, se transfirió directamente a las mujeres que tuvieron que asumir esa carga extra de trabajo no remunerado.

Una debilidad de las políticas encaminadas a la privatización, la reducción del aparato del Estado, a la focalización y descentralización de servicios, es que se centra en las mujeres pobres, lo cual no necesariamente conduce hacia a equidad de género. De igual manera, al darle prioridad a la cobertura universal de la educación primaria, se descuidan otras áreas fundamentales para la equidad de género en la educación como son la alfabetización de mujeres adultas y la retención de las mujeres en niveles avanzados de secundaria.

Para lograr realmente la equidad de género, el Estado debe incluir a las mujeres en la formulación de la política pública y combinar los programas selectivos, dirigidos a vencer los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres por su condición de género, con los programas universales dirigidos al resto de la población. (Grynspan, 1998: 92)

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las políticas públicas con enfoque de género son indispensables para lograr la equidad y una adecuada distribución de la riqueza, razón por la cuál esto se reconoce en instrumentos internacionales y se plasma como mandato en los programas de acción de los países de la región latinoamericana. A continuación, veremos brevemente el caso de las políticas públicas con enfoque de género en México.

El principal instrumento de políticas públicas con enfoque de género en México es el *Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación*

contra las mujeres 2006-2012 (Proequidad), que responde a los tres postulados fundamentales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo que son “Humanismo, Equidad y Cambio”.

Este programa es el resultado de una larga lucha que inició el movimiento de mujeres en los años 70's, que logró que se reconociera como un tema prioritario el de la participación de las mujeres en el desarrollo.

Este programa responde desde luego a los instrumentos internacionales que mencionamos antes y que México firmó como parte de su compromiso en pro de la igualdad jurídica del hombre y la mujer. A continuación veremos brevemente cuáles son los antecedentes del género en el ámbito político nacional.

En 1980 se creó el *Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo*, que propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres. Posteriormente, en 1985 se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia, y preparar la participación de México en la *Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer* (Nairobi, 1985).

Como parte de los trabajos preparatorios hacia la *Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer* se instaló en 1993, un Comité Nacional Coordinador que elaboró un informe detallado sobre la situación de las mujeres en México, así como un conjunto de diagnósticos temáticos. Posteriormente, en respuesta a los compromisos asumidos en dicha Conferencia, el gobierno de México formuló el *Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, Alianza para la Igualdad* (PRONAM), cuyo objetivo principal fue impulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el hombre.

Finalmente, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se crea esta nueva instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado, de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. (Instituto de las Mujeres, 2001: 9)

Las políticas públicas con enfoque de género responden a la necesidad de integrar a las mujeres al desarrollo, reconociendo que las mujeres viven aún en

condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación debido a prácticas sociales y concepciones culturales ancestrales que las determinan, y cuyo arraigo hace parecer su transformación como algo casi imposible. (Cazés, 1998: 65)

Los obstáculos a vencer son muchos y para hacerles frente, las políticas de equidad deben partir de las diferencias de origen que existen entre hombres y mujeres, tanto en materia de oportunidades como en cuanto a resultados, para ir hacia la búsqueda de formas, mecanismos y pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y otras.

Las políticas de equidad deben asegurar que los grupos sociales a los que se ha impedido o restringido el acceso a ciertos bienes, oportunidades y derechos, puedan alcanzarlos merced al establecimiento de mecanismos institucionales que impidan los efectos inequitativos o discriminatorios de origen racial, étnico o sexual en todas las esferas de bienes y oportunidades,

La perspectiva de género propone nuevos criterios para la definición de las políticas públicas y debe hacer visibles y medibles las condiciones específicas en que mujeres y hombres enfrentan su cotidianeidad, para modificarlas.

De manera más concreta, se reconoce que para lograr la equidad de género, se debe reducir la pobreza al mismo tiempo y esto puede requerir el subsidio directo a las mujeres para recompensar las restricciones establecidas socialmente en el mercado laboral. También es necesario analizar las consecuencias de las reformas económicas así como la internacionalización de los mercados de capital, de trabajo y de bienes y servicios en la vida de las mujeres. (Freiberg-Strauss, 1998: 80)

CAPÍTULO TERCERO

DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 36. La política estatal propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

Comentario

Recordemos lo que dice la CEDAW en su Artículo 7º respecto a la participación política:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.
- b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
- c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Artículo 37. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los poderes del Estado a través de las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

- I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género.
- II. Garantizar que la educación, en todos sus niveles, se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la conveniencia de eliminar toda forma de desigualdad.
- III. Fomentar la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos.
- IV. Fomentar la participación equilibrada y de igualdad entre mujeres y hombres en la selección, contratación y ascensos en el personal al servicio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Comentario

Al describir las diversas acciones que se deberán tomar para asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida del país, acierta el legislador al reconocer que esto se deberá afrontar de diversas maneras.

El trabajo parlamentario con perspectiva de género, tiene un significado amplio. Se refiere por una parte desde luego a promover leyes que fomenten el cierre de la brecha entre los géneros y leyes que erradiquen la discriminación y la violencia contra las mujeres, pero también se puede entender como la necesidad de legislar en todos los temas, teniendo en cuenta el impacto diferenciado que puede tener una ley sobre mujeres y hombres.

Por otra parte, resulta innegable la importancia de garantizar tanto en la educación formal como en la informal, la igualdad entre mujeres y hombres procurando eliminar todo tipo de discriminación.

La Fundación Böll de Alemania, por ejemplo, al hablar de la democracia de género, señala que “si los hombres son parte del problema, deben ser parte de la solución”. Consideramos que es correcta esta percepción y que la educación para la igualdad debe ser tanto para niñas como para niños, haciendo énfasis en que todos ganamos con una sociedad más igualitaria.

Para que se pueda avanzar en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, resulta fundamental que las mujeres participen en la toma de decisiones del ámbito político. Para esto, se han llevado a cabo acciones afirmativas que garantizan ciertas “cuotas” de participación de las mujeres en las candidaturas. Esta medida debe llevarse a cabo a la par que la educación para la igualdad, porque si no, corremos el riesgo de que suceda lo que se vio a nivel federal cuando las diputadas electas renunciaron a favor de sus suplentes varones.

Por último, el legislador reconoce la importancia de la participación de las mujeres, no sólo al interior de los partidos políticos, sino en todos los ámbitos de gobierno tanto para el acceso como para los ascensos.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 38. La política estatal promoverá la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos. Sus objetivos son:

- I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social.
- II. Asegurar que la perspectiva de género se integre en las políticas públicas.
- III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la desigualdad por cuestión de género.

Comentario

El desarrollo social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de las personas, requiere de la implementación de políticas públicas que

garanticen el acceso de mujeres y hombres a los servicios sociales de salud, educación, planificación familiar y vivienda, mediante la elaboración de modelos para el programa estatal que incluyan los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. A través del abordaje de temas como reducción de la pobreza, lucha contra el hambre, salud, asentamientos humanos, educación, investigación y capacitación, población y desarrollo; adelanto de la mujer, asistencia a los niños, integración social; información sobre derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres, así como difusión y conocimiento de la legislación en materia de desarrollo social.

Artículo 39. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

- I. Vigilar la aplicación y armonización de la legislación con las disposiciones de los tratados internacionales.
- II. Difundir entre la sociedad el contenido de sus derechos así como los mecanismos para su ejercicio.
- III. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social.
- IV. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, educación y la salud.
- V. Promover campañas estatales de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.

Comentario

El legislador en atención al mandato derivado del Artículo 4º constitucional, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma y ratificación de convenios y tratados internacionales, armonizará y actualizará la norma relativa a la igualdad entre mujeres y hombres. La difusión que se haga de los derechos humanos y libertades fundamentales, se hará con base en los principios de igualdad y no discriminación social. Se impulsarán acciones y se harán reflexiones sobre las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres. Se les informará sobre el contenido de la norma civil y familiar y del derecho a acceder a la salud y a la alimentación.

La difusión de los derechos humanos se realizará en apego a lo dispuesto por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado que establece en el

Artículo 9º fracción X “promover la participación de los sectores público, social y privado, en la formulación y ejecución de los programas destinados a la divulgación y respeto de los derechos humanos, así como en la prevención de las posibles violaciones de los mismos”

CAPÍTULO QUINTO

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL

Artículo 40. La política estatal promoverá y garantizará la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, y sus objetivos son:

- I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- II. Promover los derechos humanos universales.
- III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Comentario

En este precepto se establece la evaluación de la legislación respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, la difusión de los derechos humanos con el fin de que se conozcan y reconozcan para un real y pleno ejercicio de ellos. El programa estatal contemplará la asignación de recursos y reformas en el funcionamiento de los servicios para atender a mujeres violentadas y el rechazo a la violencia contra las mujeres.

Artículo 41. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los poderes del Estado a través de las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

- I. Mejorar los sistemas de trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de retribución.
- II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo.
- III. Impulsar la capacitación y actualización a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres.

V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los Derechos Humanos e igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo.

VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar, en los ámbitos público, social y privado, todas las formas de discriminación.

VII. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra la mujer y el hombre.

Comentario

La evolución de la normas para el trabajo de las mujeres como la de 1917 con la “Declaración de Derechos Sociales”; 1928 con la promulgación del Código Civil; 1931 con la expedición de la Ley Federal el Trabajo; 1931 época en que se reformó la Ley, y 1970 con la nueva Ley que proclamó el principio de igualdad de la mujer. La adición al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del principio de igualdad jurídica: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. Otorgando a la mujer la posibilidad de celebrar todo tipo de contratos y no permitir ningún tipo de discriminación en razón de su sexo o estado civil.

El Artículo 123, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece: “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. El Artículo 164 determina: “las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres”.

Los servicios de salud con perspectiva de género responden a las necesidades de salud integral de las mujeres, a este respecto, el Artículo 165 de la LFT, establece: “las modalidades que se consignan en este capítulo, tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad” (Capítulo Quinto, Título Quinto, Trabajo de las Mujeres: Artículos 164-167, 170-172).

Los integrantes de “El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” contarán con conocimientos relativos a género, igualdad entre hombre y mujeres, para ello el sistema promoverá cursos de capacitación y actualización en la materia.

Los integrantes del sistema estatal harán propuestas de reforma al sistema jurídico estatal, municipal o de práctica administrativa que coadyuven en la protección de mujeres y hombres así como en el conocimiento, reconocimiento y defensa de sus derechos humanos.

La Secretaría promoverá la participación de los sectores público, social y privado en la formulación y ejecución del programa estatal, así como en la prevención de las posibles violaciones a los derechos humanos y en la atención de víctimas de violencia contra las mujeres y los hombres.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

Artículo 42. Será objetivo de la política estatal, la eliminación de estereotipos que fomenten la desigualdad por cuestión de género.

En la CEDAW, el gobierno de México se compromete a: ¿???

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

- a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Este es uno de los objetivos más difíciles de alcanzar, ya que se trata de romper con esquemas profundamente arraigados en las creencias y costumbres de las personas, por lo que se debe plantear a mediano o largo plazo a través de la educación, principalmente.

Artículo 43. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

- I. Promover tareas que contribuyan a erradicar toda desigualdad basada en estereotipos de género.
- II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.
- III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

Comentario

Las medidas a tomar de acuerdo a este artículo, se dividen en tres rubros. Para comprender la primera medida que consiste en erradicar la desigualdad basada en estereotipos de género, habría que saber qué se entiende por estereotipos de género.

De acuerdo al glosario del Instituto Nacional de las Mujeres, *“los estereotipos son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Los estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera analítica.”*²¹

De esta manera, los estereotipos de género son los que les asignen de manera convencional ciertas características de inferioridad a las mujeres (sumisas, sentimentales, débiles) y de superioridad a los hombres (fuertes, racionales, dominantes).

En cuanto a la concientización sobre la importancia de la igualdad, éste es el primer paso que se debe tomar en la formulación de las políticas públicas, a través de la educación, se deberá sensibilizar a toda la población sobre este tema.

Por último, con este artículo se indica que será necesaria la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, esto con el fin de poder evaluar el impacto diferenciado que tendrán las políticas sobre las mujeres y los hombres.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 44. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos, normas y programas sobre igualdad entre mujeres y hombres.

²¹ Ver Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, p. 62.

Comentario

De acuerdo al artículo 6º párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

- IV. *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública...”*

En el estado de Michoacán, se reconoce la importancia de la transparencia y acceso a la información pública gubernamental como queda manifiesto por la reforma al Artículo 97 de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de septiembre de 2008, para crear el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

El 16 de octubre de 2008 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, como ley reglamentaria de este Artículo 97 constitucional, y en su Artículo 2º señala: *“La información pública materia de este ordenamiento, creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es un bien público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella para los fines que considere en los términos previstos por éste.”*

Artículo 45. La Secretaría por conducto del Sistema Estatal promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley.

Comentario

Este artículo responde a lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo: *“El sistema de planeación integral del Estado de Michoacán, estructurará los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo del Estado.”*

El acceso a la información y la transparencia son necesarios para que la población conozca las actividades que lleva a cabo el gobierno del estado, y con base en esta información, participe en la planeación, ejecución y posterior evaluación de los planes y programas para la igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 46. Los acuerdos y convenios que, en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

Comentario

En este artículo se refuerza la importancia de la colaboración entre las diversas instancias para actuar de manera coordinada hacia un mismo fin: la igualdad entre mujeres y hombres, teniendo como marco las políticas estatales de igualdad.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 47. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es la encargada del seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal.

Tendrá por objeto la creación de un sistema de información con capacidad para conocer la situación sobre la igualdad entre hombres y mujeres, así como el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.

Comentario

En apego a lo dispuesto por el Artículo 9º fracción V, de la Ley de la Comisión Estatal, a la Comisión le corresponde “proponer políticas en materia de derechos humanos a través de pronunciamientos, así como diseñar y establecer los mecanismos de coordinación entre la Comisión, el Sector Público y la Sociedad Civil que aseguren su adecuada observancia y ejecución”, y en el caso del programa estatal, de los Integrantes de “El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Es además, el órgano constitucional encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal; le corresponde la creación del sistema de

información con la finalidad de conocer la situación real sobre igualdad entre hombres y mujeres, así como el impacto social de las políticas públicas relativas al tema.

Artículo 48. El seguimiento del programa estatal, preferentemente deberá ser realizado por personas de reconocida trayectoria y especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.

Comentario

El personal encargado del seguimiento del programa deberá contar con: sensibilidad respecto a los problemas de género; metodología adecuada para realizar el seguimiento; información de datos desagregados por género; práctica para observar la realidad social en la que interviene; literatura disponible; y recursos suficientes para realizar dicha actividad.

Artículo 49. El seguimiento y la evaluación consistirá en:

- I. Recibir información sobre medidas y actividades que pongan en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- II. Evaluar el impacto de las políticas y medidas que afecten a las mujeres y a los hombres en materia de igualdad dentro de la sociedad.
- III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad.
- IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.
- V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

Comentario

A La Comisión Estatal de los Derechos Humanos corresponde la observancia, seguimiento, evaluación y monitoreo, en las materias que la Ley le confiere y en las que sea requerida su opinión.

La Secretaría le proporcionará información relativa a la creación e implementación del programa estatal y de todas las acciones que los integrantes del sistema realicen en materia de igualdad entre hombre y mujeres.

Mediante la información recibida, a través del Sistema de información evaluará el impacto social de la implementación del programa estatal y de las políticas públicas y medidas relativas a igualdad entre mujeres y hombres. Como resultado propondrá la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la realidad social de mujeres y hombres en materia de igualdad.

Del resultado final informará al Ejecutivo Estatal y a los Integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en su caso, formulará las recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Artículo 50. De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la materia objeto de esta Ley.

Comentario: El artículo 9º fracción I de la Ley de la Comisión Estatal tiene como atribuciones “conocer de oficio o a petición de parte, presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas de actos u omisiones de naturaleza administrativa de servidores públicos estatales o municipales”.

BIBLIOGRAFÍA

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán 2008-2012.

Carbonell, Miguel, *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Comentada*, Colección Estudios 4, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2007.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Bunch, Charlotte; Hinojosa, Claudia y Reilly, Niamh, editoras, *Los Derechos Humanos de las Mujeres son Derechos Humanos*, edit. EDAMEX, México, 2000.

González Marín, Nuria y Chávez Sánchez Odalinda, *Dos temas torales para los Derechos Humanos: Acciones Positivas y Justiciabilidad de los Derechos Sociales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2008.

Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Programa de Acción de El Cairo, 1994.

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, 1995.

Informe Anual 2007, Volumen II, Situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2008.

Ocampo, José Antonio, “Políticas Públicas y Equidad de Género” en *Macroeconomía, Género, y Estado*, Departamento Nacional de Planeación, con el auspicio de BMZ y la GTZ, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998.

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.

Motta Cristina y Macarena Sáez, editoras académicas, *La mirada de los jueces, Género en la jurisprudencia latinoamericana*, Tomo I, Red Alas, Bogotá, 2008.

Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición).

Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Cazés, Daniel, *La perspectiva de género, guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles*, Consejo Nacional de Población, México D.F., 1998.

Freiberg-Strauss, Joerg, "Macroeconomía y Género: Opciones para su integración en la agenda del Estado" en *Macroeconomía, Género, y Estado*, Departamento Nacional de Planeación, con el auspicio de BMZ y la GTZ, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998.

Grynspan, Rebeca, "Políticas económicas, gasto público y efectos según género" en *Macroeconomía, Género, y Estado*, Departamento Nacional de Planeación, con el auspicio de BMZ y la GTZ, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998.

Guzmán, Virginia y Rosalba Todaro, "Apuntes sobre género en la economía global" en *El Género en la Economía*, Rosalba Todaro y Regina Rodríguez, editoras. Centro de Estudios de la Mujer, Isis Internacional, Santiago, Chile, 2001.

Lagarde, Marcela, "Las mujeres y la organización genérica del mundo" en *Género, Políticas Públicas y Desarrollo*, Notas de clase Seminario-taller Género, Políticas Públicas y Desarrollo, Octubre-noviembre de 1992, CEM, UNICEF, SERNAM. Ediciones CEM, Santiago, Chile, 1994.

Lerda, Sandra y Rebeca Salazar, "Estado y Políticas Públicas" en *Género, Políticas Públicas y Desarrollo*, Notas de clase Seminario-taller Género, Políticas Públicas y Desarrollo, Octubre-noviembre de 1992, CEM, UNICEF, SERNAM, Ediciones CEM, Santiago, Chile, 1994.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.